



Año 2016- Bicentenario de la Declaración de la
Independencia Nacional

Ministerio Público de la Defensa
Defensoría General de la Nación

RESOLUCIÓN SCDGN N° 2/17

Buenos Aires, 7 de febrero de 2017.

VISTAS las presentaciones realizadas por las Dras. María Eugenia DI LAUDO y Verónica María BLANCO, en el trámite del concurso para la selección de la terna de candidatos al cargo de *Defensor Público Oficial ante la Cámara Federal de Casación Penal, Defensoría N°1 (CONCURSO N° 103 MPD)*; y

CONSIDERANDO:

I. Impugnación de la Dra. María Eugenia DI

LAUDO:

La postulante cuestionó el puntaje que obtuvo tanto en la evaluación de antecedentes como en las pruebas de oposición oral y escrita.

En cuanto a la puntuación de sus antecedentes laborales, hizo una reseña de su carrera judicial y solicitó que se incrementen a 25 puntos, alegando que ese es el puntaje que se le asignó a los postulantes de los Registros 15 y 37 “con carreras y tiempos similares en cargos de funcionarios”.

Asimismo, solicitó que se le asignen 1,5 puntos en el subinciso A.2 por su desempeño como Secretaria Docente y Administrativa de la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, delegación San Martín, entre el 4 de abril de 2006 y el 25 de noviembre de 2009.

En cuanto al rubro correspondiente al sub-inciso A.3, solicitó que el puntaje asignado se eleve a 15 puntos, teniendo en cuenta que se desempeñó “casi 15 años en el fuero federal y casi 8 años en el fuero federal y la instancia de casación. De los cuales, más de 4 años, a la fecha de la inscripción, actué como defensora de la instancia y en el fuero”. Asimismo, afirmó que al postulante del “Registro 42 por trabajar en el fuero federal desde 2004 y nunca en la instancia de casación, se le otorgaron 14 puntos”.

Cuestionó también el puntaje asignado en el inciso c. Al respecto, propició que se le otorguen 12 puntos, toda vez que realizó más horas de posgrado que los postulantes de los registros 24, 38 y 39. En esta dirección señaló que “[l]a normativa aplicable establece que a las carreras de posgrado culminadas sin tesis se les concede el 50% de lo que correspondería si estuviese terminada (inciso B), es decir 50 % de lo que me correspondería si estuviese terminada (inciso B), es decir 50% de 10 puntos en maestrías y Especialización. Entonces, yo tengo culminadas dos carreras (la de la UBA y la de la Escuela del Servicio de Justicia), por ambas, deben sumarse 10 puntos. A ello, debe agregarse las especializaciones en magistratura del CMPJN y de la AMFJN, los cursos de DGN y la CSJN. Todo lo cual, supera ampliamente los 2 puntos restantes para alcanzar el máximo de 12 puntos (conf. Res. DGN 180/12)”.

ALEJANDRO SABELLI
SECRETARIO GENERAL
DEFENSORÍA GENERAL DE LA NACIÓN

USO OFICIAL

En lo que atañe al inciso D, solicitó que se le asignen 5 puntos por haber revestido el cargo de profesora Adjunta de Derecho Penal II en la UCSE por un lapso de 4 años.

Respecto al rubro contemplado en el inciso E, sostuvo que debe otorgársele 1 punto por los dos artículos que publicó, alegando que las pautas de la Res. DGN 180/12 establecen que por cada uno de ellos se concederán 0,50 puntos.

Por otra parte, cuestionó el puntaje asignado en la oposición escrita. Entendió que “[s]e omitió valorar positivamente la exposición de circunstancias relacionadas con la admisibilidad y el desarrollo de agravios pertinentes para la solución del caso”.

Asimismo, apuntó que “se omitió valorar positivamente la fundamentación que derriba la ‘inspección’ invocada por la jurisdicción y la demostración de que la utilización de la cámara termográfica para ingresar al domicilio, significó un allanamiento ilegal, al carecer de orden judicial y al no darse las razones de urgencia”.

Afirmó también que: “[e]n el tratamiento sobre la ausencia de ‘sospecha’ suficiente para emitir la orden de allanamiento; se omitió valorar positivamente el desarrollo acerca de los datos brindados por los ‘informantes’ en que se sustenta la orden del juez. Se trata de un elemento no ponderado por otros concursantes y determinante al momento de presentar la fundamentación sobre la ausencia de una legítima y acreditada sospecha que pudiera haber habilitado la orden de allanamiento”.

Entendió que “tampoco se valoraron otros planteos que omitieron los demás concursantes tales como: la posibilidad de la aplicación de la ley más benigna para que no se aplique el trámite de flagrancia; la detectada ausencia de voluntad del imputado en el acuerdo de juicio abreviado y, especialmente, la petición subsidiaria de una suspensión del juicio a prueba”.

Por todo ello propició que se eleve la calificación a 50 (cincuenta) puntos.

En otro orden de planteos, propició que se incremente a 29 puntos la calificación asignada a su oposición oral alegando que: “no solo traté todos los agravios conducentes a la mejor solución del caso conforme los intereses de mi asistido, sino que, además, hice citas jurisprudenciales de la CSJN directamente aplicables al caso propuesto” y que “la única postulante que mencionó la jurisprudencia relevante y directamente aplicable a la propuesta, fue la suscripta”. En favor de su petición, finalmente afirmó que: “la única valoración que podría justificar la reducción de la puntuación en 5 puntos, referida a una ‘deseable mejor estructuración y fluidez del discurso’, debo decir que



Año 2016- Bicentenario de la Declaración de la
Independencia Nacional

Ministerio Público de la Defensa
Defensoría General de la Nación

se contraponen con la expresión ‘Correcta exposición de cada uno de los agravios presentados’. Sobre todo, teniendo especialmente en cuenta la complejidad del caso, el tiempo para la preparación del alegato -40 minutos-, la multiplicidad de agravios desarrollados y fundados (en los hechos, derecho y jurisprudencia), su pertinencia a los intereses del imputado y la limitación temporal de la exposición en 15 minutos”.

II. Impugnación de la Dra. Verónica María

Blanco:

Impugnó tanto la calificación de sus antecedentes como el puntaje obtenido en las pruebas de oposición escrita y oral.

En lo que respecta al subinciso A.3, efectuó una reseña de su actuación profesional. Sostuvo que sus designaciones como Defensora Auxiliar, Defensora de Instrucción y luego como Defensora de Juicio “han sido subvaluadas” en comparación con los Dres. Todarello y Di Laudo. En el caso del Dr. Todarello señaló que se le asignaron 13 puntos, siendo que “[e]l primer cargo por concurso al que accedió como Magistrado fue el que ejerce actualmente, como defensor de juicio del fuero Federal en La Plata, en junio de 2015, cuando la suscripta ya había sido honrada con dos cargos previos (defensora auxiliar y defensora de instrucción), hacía ya más de 5 años”.

En relación a la postulante Di Laudo sostuvo que ingresó al MPD en noviembre de 2011, cuando la suscripta se encontraba ya hace once años ejerciendo la defensa.

Agregó que “debe considerarse que si bien en la actualidad el cargo concursado se limita al fuero federal, hasta el año 2015, la Defensoría concursada también se ocupaba de asuntos ordinarios”, que teniendo en cuenta que durante ese período actuó en la justicia ordinaria y que “en el caso de los postulantes mencionados, [...] no procede una diferencia de puntaje en virtud del fuero”.

En cuanto a la oposición escrita, se comparó con las devoluciones efectuadas a los postulantes PINTURA, ARTE y TEATRO. Sostuvo que del dictamen de corrección surge que se observó del examen de la impugnante una “buena fundamentación de los agravios ensayados”, que “la valoración expresada por el Tribunal respecto a la calidad de mi prueba [...] ha sido superior a la realizada en relación con el resto” y que por ello no encuentra razón para que se le haya asignado el mismo puntaje que a los otros postulantes.

Sostuvo que ella y la postulante ARTE fueron las únicas que plantearon la ausencia de defensa dual, pero que esta última no citó jurisprudencia de la CSJN.

Agregó que ella no sólo planteó la ilegalidad sino la ilegitimidad de la intervención policial y que en el resto de los exámenes no se observa

ALEJANDRO SABELLA
SECRETARIO GENERAL
DEFENSORÍA GENERAL DE LA NACIÓN

USO OFICIAL

“vinculación alguna del caso con las normas que regulan el modo en que puede iniciarse el proceso penal”.

Añadió que, en su caso, “los agravios fueron expuestos de forma clara, independiente y precisa, observándose en el resto de los exámenes que se han mezclado las cuestiones de la defensa técnica ineficaz con la ausencia del defensor de menores o la no aplicación del régimen de minoridad (Pintura), o no se ha detectado la posible atipicidad del hecho (Arte)” que fue la única que se refirió a la importancia de la violación del in dubio pro reo al momento de la calificación legal y que por todo ello su examen merece un mayor puntaje que el asignado a sus colegas.

En lo que atañe a la prueba de oposición oral, sostuvo que el puntaje no se compadece con la devolución otorgada y que por ello resulta arbitrario.

Se comparó con la postulante Di Laudo. Al respecto sostuvo que ambas realizaron planteos similares y que en su caso realizó planteos de insubsistencia de la acción penal y de prescripción que no se observaron en el caso de la concursante con la que se compara. Añadió que más allá de la cita del precedente efectuada por Di Laudo “debe sopesarse la circunstancia de presentar un discurso bien estructurado y convincente, frente a uno que se presentó como menos estructurado y fluido...” y que al menos se le debe asignar “el mismo puntaje que a su colega”.

III. Tratamiento de la impugnación de la Dra. María Eugenia DI LAUDO:

En primer orden, no es dable soslayar que la postulante, luego de la primera oposición, presentó impugnación omitiendo cuestionar en esa oportunidad el puntaje asignado por sus antecedentes. No obstante que la omisión de cuestionamiento oportuno determina el rechazo de los planteos, cabe al respecto señalar que aún del análisis de los agravios no se advierten razones que conlleven la modificación del puntaje que se pretende.

En efecto, en lo que respecta al subinciso A.1, las Pautas Aritméticas de Evaluación de Antecedentes -invocadas por la propia recurrente- establecen para el cargo de Secretario Letrado que ostenta la concursante una escala que va de los 22 a los 25 puntos y que se asignará un punto por cada dos años de ejercicio del cargo o labor. En tales condiciones, siendo que la Dra. Di Laudo reviste ese cargo desde el 14 de octubre de 2011 y que a la fecha del cierre de la inscripción sumaba dos periodos de dos años, la calificación de 24 puntos que se le asignó resulta adecuada.

En lo que hace al reclamo vinculado al subinciso A2, cabe apuntar que más allá de que el cargo invocado no resulta de los contemplados en el



Año 2016- Bicentenario de la Declaración de la
Independencia Nacional

Ministerio Público de la Defensa
Defensoría General de la Nación

inciso, el período en el que lo desempeñó coincide temporalmente con su actuación en el Poder Judicial, circunstancia que priva de sustento al planteo.

En cuanto al subinciso A.3, cabe señalar que sus antecedentes han sido justipreciados de conformidad con la pauta reglamentaria aplicable y con arreglo al mismo criterio que moderó la evaluación de todos los postulantes, sin que se advierta motivo alguno que de pábulo al reclamo intentado. En tal sentido, cabe resaltar que el rubro en cuestión, en el que se contempla la especialización funcional o profesional, ponderada en relación a la vacante a cubrir, toma en cuenta el ejercicio efectivo de la defensa y la vinculación de las actividades desplegadas con el fuero al que corresponde la vacante. Al respecto, la Dra. Di Laudo acreditó con actuaciones judiciales haber ejercido la defensa ante la CFCP entre los años 2011 y 2015, de modo que los 13 puntos que se le asignaron resultan ajustados al baremo de evaluación.

El puntaje asignado por los antecedentes indicados en el inciso C resulta también ajustado a las pautas de evaluación. En tal sentido, la petición de la impugnante en punto a que se le sume aritméticamente el 50% de cada una de las distintas carreras que tiene sin culminar no resulta atendible, pues de la consideración integral de la reglamentación aplicable y de elementales reglas de equidad resulta que la solución propuesta implicaría un desmedro para aquellos postulantes que sí cuentan con carreras concluidas.

Por otra parte, tampoco puede prosperar el planteo vinculado al inciso D, pues las propias pautas aritméticas y la reglamentación aplicable establecen que se deberá considerar, *inter alia*, la institución donde se desarrollaron las tareas, los cursos dictados y la duración del cargo docente. Al respecto no es dable soslayar el período durante el cual la postulante ejerció el cargo de Profesora Adjunta, que el cargo de mención ya no lo ejercía al tiempo de la inscripción, que no se trata de una designación que haya sido consecuencia de un concurso y, por último, el resto de sus antecedentes en la carrera docente, integralmente considerados.

Asimismo, el incremento del puntaje que se le asignó por la publicación de dos artículos no encuentra sustento en la Res. DGN 180/12 que invoca, pues de la misma surge que se otorgarán “**hasta**” 0,50 puntos por cada artículo, de modo que el puntaje que se le asignó cuadra dentro del guarismo de mención (el resultado nos pertenece).

Tampoco habrán de prosperar los cuestionamientos a las pruebas de oposición oral y escrita.

En primer lugar, y en punto a lo afirmado respecto a que no se valoraron puntos de gravamen de la prueba de oposición escrita, cabe apuntar que el dictamen no constituye una reedición taxativa de cada uno de los planteos

ALEJANDRO SABELLI
SECRETARIO LEY DE
DEFENSA GENERAL DE LA NACIÓN

USO OFICIAL

efectuados, lo que no implica que no hayan sido valorados por este Jurado. El examen de la postulante fue integralmente considerado y la devolución efectuada refleja aquellos aspectos relevantes que a juicio de este Tribunal determinaron la calificación obtenida. En tal sentido se indicó, entre otras cosas, que “[l]a admisibilidad del recurso requería una mayor consideración del precedente “Girolodi” (CSJN)”, que citó precedentes jurisprudenciales y efectuó un suficiente desarrollo de cada uno de los plurales agravios ensayados”. No obstante ello, se señaló que no había advertido la ausencia de la defensa dual y que el petitorio no menciona el depósito legal o el beneficio de litigar sin gastos. Asimismo, que no obstante considerar brevemente los precedentes “Girolodi” y “Araoz”, no había articulado la violación del derecho al recurso como agravio independiente. La impugnación omite la consideración integral de lo reflejado en el dictamen y que fue en definitiva lo que determinó la calificación asignada.

Por otra parte, los cuestionamientos a la prueba de oposición oral carecen de los fundamentos mínimos y necesarios en orden a demostrar el incremento en la calificación que se peticiona. En efecto, la presentación contiene los propios juicios de valor de la impugnante en torno al contenido de su examen y una discrepancia con la justipreciación que hizo este tribunal respecto de los méritos y démeros que se observaron en su exposición, sin demostrar siquiera mínimamente que la corrección haya incurrido en arbitrariedad o error material alguno que la invalide como tal.

Por todas las razones expuestas, corresponde no hacer lugar a la impugnación deducida.

IV. Tratamiento de la impugnación de la Dra.

Verónica María BLANCO:

En lo que respecta al planteo dirigido contra el puntaje que se le asignó por el rubro A.3, cabe señalar que las comparaciones que trae la impugnante no alcanzan a dar sustento al incremento de puntaje que pretende, pues no media analogía entre su situación y la de los postulantes con los que se compara.

En efecto, en el caso de la postulante Di Laudo, acreditó cinco años de ejercicio de la defensa ante la Cámara ante la que actúa la vacante concursada, en tanto la Dra. Blanco tiene menos años de actuación acreditada en el fuero e instancia correspondientes al cargo en cuestión.

Lo propio ocurre con el Dr. Todarello, quien tiene más años de actuación acreditada ante el fuero federal que la Dra. Blanco. Al respecto, cabe añadir que más allá de la antigüedad de cada uno de los postulantes en los cargos que revestían al tiempo de su inscripción -cuya valoración opera en el marco de los subincisos A1 y A2-, en el rubro A3 lo que se considera es la especialidad funcional vinculada con el ejercicio de la defensa y la vacante concursada.



Año 2016- Bicentenario de la Declaración de la
Independencia Nacional

Ministerio Público de la Defensa
Defensoría General de la Nación


En estas condiciones, los antecedentes de la Dra. Blanco fueron valorados con el mismo baremo con el que se justipreciaron los del resto de los concursantes, no advirtiéndose la concurrencia de un error material o algún supuesto de arbitrariedad que justifique hacer lugar a la solución reclamada por la impugnante.

Por lo demás, los agravios dirigidos contra el puntaje que se le asignó en las pruebas de oposición oral y escrita se apoyan en sustancia, en la propia estimación de la impugnante en punto al contenido de su examen en relación al de otros postulantes y en una divergencia con la valoración efectuada en el caso por este Jurado. En tal sentido, las apreciaciones que efectúa respecto al mérito de sus evaluaciones y las de los otros concursantes sólo traslucen su propio juicio respecto del valor de cada una de las oposiciones, pero no alcanzan a demostrar la configuración de algún vicio que habilite a modificar el puntaje oportunamente asignado.

Por todo lo expuesto, **EL JURADO DE CONCURSO RESUELVE:**

NO HACER LUGAR a las impugnaciones formuladas por las Dras. María Eugenia DI LAUDO y Verónica María BLANCO.

Regístrese y notifíquese conforme a la pauta reglamentaria.




Juan H. Langevin
Presidente

Rosana Andrea GAMBACORTA
(por adhesión)


Eduardo PERALTA
(por adhesión)



Javier A. MARINO



Carlos A. BERALDI



ALEJANDRO SABELLI
SERENARIO LETRADO
DEFENSORÍA GENERAL DE LA NACIÓN

USO OFICIAL